

Protestas socioambientales e inseguridad en el estado de Veracruz: 2010-2016

Martín Gerardo Aguilar Sánchez¹

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar en torno a las luchas sociales que se dan en el estado de Veracruz entre 2010 a 2016, específicamente las luchas socio-ambientales y contra la inseguridad. En un contexto político adverso, pues existe un sistema político autoritario y la consolidación del modelo neo extractivista, diferentes actores sociales se resisten y organizan para revertir megaproyectos como los mineros, hidráulicos y petroleros. Por otro lado, el vínculo entre la delincuencia organizada y el gobierno estatal, son barreras que los colectivos tienen que rebasar. Es la ciudadanía que, venciendo el miedo, protesta y denuncia la gravedad de la situación. Estas luchas y protestas sociales contravienen la hipótesis de que no existe participación y que la ciudadanía es apática en Veracruz. Estas luchas y protestas sociales muestran el contra argumento.

Palabras clave: Autoritarismo, participación, protestas, inseguridad, megaproyectos.

Socio environmental struggles and insecurity in Veracruz state: 2010-2016

Abstract

The objective of this work is to reflect on the social struggles occurred in the state of Veracruz from 2010 to 2016, specifically those related to socio-environmental conflicts and against social insecurity. In the middle of an adverse political context, due to an unfavorable political system and the consolidation of a neo extracting model, different social actors are resisting and getting organized to revert mega-projects, including miners, hydraulic and oil tankers. On the other hand, the relationship between the organized crime and the state government are barriers which those social groups to struggle. It is therefore citizens, who overcoming fear to protest and denounce

¹ Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Pierre Mendès France, en Grenoble, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Correo: aguilar_m20@hotmail.com

this difficult situation. Contrary to the hypothesis that there is no social participation and citizenship's apathy in Veracruz, these struggles and social protests show the opposite argument.

Key words: Authoritarianism, participation, protests, insecurity, mega-projects.

Introducción

Las elecciones que se llevaron a cabo el 5 de junio de 2016 en el estado de Veracruz para elegir gobernador y diputados mostraron las condiciones sociales y económicas en que se encuentra el estado. Lo que para muchos fue una sorpresa —la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— fue asumido por otros como un resultado que permite una especie de renovación del sistema político veracruzano, lo que aminora las posibilidades de que se acentúe la crisis política. El PRI perdió la elección para gobernador y también perdió el control del Congreso. El ganador fue el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lo novedoso fue que Morena se convirtió en la tercera fuerza electoral; si eventualmente este partido llegara a establecer un acuerdo con la coalición ganadora, podría lograrse una mayoría en el Congreso; sin embargo, tal cosa luce complicada, dadas las diferencias ideológicas que privan entre estas organizaciones políticas. ¿Qué fue lo que propició este resultado electoral? ¿La presencia de los partidos políticos? ¿La crisis en el interior del PRI? ¿Las graves condiciones sociales y de inseguridad en que se encuentra el estado? ¿La organización de la sociedad civil en Veracruz? Sin lugar a dudas, debemos desechar la primera respuesta. El desencanto de la ciudadanía ante los partidos políticos es evidente. El punto central reside en que, frente a un panorama tan difícil y complicado, los partidos políticos que ya están en la escena simplemente ofrecen salidas momentáneas a la ciudadanía².

Diversos acontecimientos han deteriorado las condiciones de vida de los veracruzanos; en particular, dos cuestiones: primero, la incapacidad para gobernar por parte de la administración de Javier Duarte y su equipo. Entre

² Los candidatos con más votos fueron: Miguel Ángel Yunes Linares, por el PAN-PRD, con 945 560 votos; Héctor Yunes Landa, del PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana (AVE), con 839 127 votos, y Cuitláhuac García, de Morena, con 721 427 votos.

las características de su gobierno se cuentan la simulación, misma que lo llevó a una negación de los graves problemas que aquejan al estado; la corrupción generalizada en todos los ámbitos, propiciada por el propio ejecutivo; la presencia del narcotráfico en todo el territorio veracruzano, lo que ha llevado a índices muy altos de inseguridad en diversos sectores: jóvenes, empresarios, ganaderos, mujeres, etcétera.

Esta situación ha vuelto evidente el vínculo existente entre un sector de la clase política y el crimen organizado, difícil de comprobar, desde luego, pero claro ante los ojos de la ciudadanía, por el sinfín de acontecimientos trágicos que han venido sucediendo, como la muerte de periodistas, las desapariciones de jóvenes (como los casos de Papantla y Tierra Blanca), las desapariciones de migrantes, secuestros, represión a estudiantes, extorsiones a ciudadanos comunes, presiones a médicos, etcétera³.

A estas condiciones de inseguridad, se suman las agudas condiciones de pobreza y la falta de empleos, así como el malestar que han ocasionado las reformas educativa y energética, en sectores como el magisterio y los trabajadores del petróleo. Esta situación ha dado como resultado un desgaste de los tradicionales mecanismos clientelares que ha tenido el PRI, lo mismo que de la lealtad de las organizaciones corporativas. Si a esto añadimos los conflictos internos en el PRI, las condiciones eran óptimas para aquellas opciones que estaban en posición de desplazar a dicho partido.

Es necesario tener claro que este cambio político —que no podemos calificar como estructural— no desaparece como por arte de magia un conjunto de procedimientos que el sistema político ha acuñado en la larga historia de su conformación; tampoco podemos asumir que el PAN y el PRD sean sinónimos de transparencia y de democracia; más bien, pareciera que estamos ante una pequeña grieta, como lo menciona Zibechi, en el esquema de dominación en Veracruz (Zibechi, 2010). ¿Qué puede permitir esta grieta? Como lo hemos mencionado en otros trabajos, la característica principal del sistema político veracruzano es su autoritarismo, que consiste en que el ejecutivo ha tenido el control de un conjunto de instituciones que, en un contexto mayormente democrático, permitiría el avance de instancias como la Comisión de los Derechos Humanos, los medios de comunicación estatales, el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, el Instituto Electoral, por mencionar algunos de los más importantes.

³ Véase *El Universal*, 1 de abril de 2016.

Está, además, el uso de las policías para reprimir nuevos movimientos e inconformidades de la ciudadanía y un sistema corporativo clientelar –compuesto por aquellas organizaciones vinculadas al PRI, como la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), la CNC (Confederación Nacional Campesina), la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación)– que en los últimos años se ha visto menguado. ¿Qué es entonces lo que se debilita? ¿Cuál es la lectura que podemos hacer del triunfo electoral del PAN-PRD? Creo que lo que se evidencia es una crisis del sistema de dominación encabezado por la facción priista veracruzana y de sus mecanismos tradicionales de control, que se sostenían por las vías del consenso y de una identidad ideológica, así como por la distribución de recursos económicos y el control corporativo. Estos mecanismos se debilitaron, lo que ha permitido la presencia de otros partidos en el reparto del poder a partir de la redistribución de recursos.

En Veracruz, como en otros estados, las elecciones se ganaban con la participación de la llamada estructura paralela, que consiste en utilizar a las instituciones estatales como reservas de votos. Con las críticas hechas en la elección de 2012, en las que Peña Nieto gana la elección presidencial sin aclarar el origen de los recursos con los que se financió su campaña, quedaron evidenciados, a nivel nacional, aquellos estados que de manera cínica utilizaban los recursos institucionales, entre ellos Veracruz.

El deterioro de las condiciones de la ciudadanía que hemos descrito al inicio y la crisis política abren una posibilidad de redireccionar la democracia, siempre y cuando la ciudadanía ocupe un primer plano, en el que ésta y las organizaciones sociales vigilen, transformen el sistema de partidos y generen otro esquema de participación.

Este es el contexto donde acontecen las movilizaciones y las protestas sociales en el estado de Veracruz. Estas protestas son protagonizadas por diversos sujetos sociales que se resisten a la situación de corrupción y de impunidad y, por otro lado, al momento económico neoliberal y neoextractivista. Con el objetivo de entender el panorama de las protestas en Veracruz, mencionaremos dos ámbitos que nos parece indican los problemas mencionados. Por un lado, las protestas socioambientales y, por otro, las protestas contra la inseguridad.

Estas luchas sociales y protestas socioambientales se inscriben en un cambio de paradigma, donde el modelo extractivista exportador es un eje en la economía latinoamericana, mismo que describe acertadamente Marystella

Svampa. La intensificación del capital requiere de un proceso más acelerado de explotación de las materias primas, el cual conlleva la pérdida de derechos y de territorio de actores sociales (Svampa, 2008).

En este sentido, las protestas y las luchas sociales inician con un proceso de resistencia, que implica también organización y el uso de repertorios aprendidos en distintas etapas de la lucha social (Tilly, 2010). En cuanto a las protestas contra la inseguridad, lo que nos interesa es entender cómo, ante el fenómeno de la violencia, en un estado donde la impunidad es el pan de cada día, las protestas adquieren un alto grado de significación y de simbolismo (Melucci, 1999).

Estos tipos de protesta se producen en un contexto donde el Estado y el sistema político son ajenos a las preocupaciones de la ciudadanía. Dos procesos diferentes, lo ambiental y la inseguridad, tienen un aspecto en común: la resistencia de grupos sociales y de ciudadanos que tienen que construir respuestas y movilización organizada contra sus adversarios y, recurrentemente, contra el Estado.

En general, los estudios de caso presentados se nutren de dos fuentes. La primera está constituida por trabajos de investigadores y de estudiantes de posgrado que han sido discutidos en el seminario Acción Colectiva y Política, con temáticas relativas a las protestas socioambientales. La segunda, por el trabajo de campo y las entrevistas que he realizado en los ámbitos del petróleo y de ese tema tan complejo que es la cuestión de la inseguridad. Por ejemplo, en relación con la región petrolera que hemos abordado, pudimos hacer un recorrido con un grupo de ingenieros de ATG por las áreas de trabajo, y también recorrí las comunidades donde la explotación petrolera impactaba.

Por supuesto, se cuenta con el soporte bibliográfico y hemerográfico de las fuentes mencionadas; en cuanto a la hemerografía, hemos hecho revisiones de periódicos estatales y nacionales.

Las protestas socioambientales

En esta nueva etapa neoextractivista se han desarrollado múltiples proyectos en Veracruz que afectan a comunidades urbanas y rurales. En esta ocasión, abordaremos varios casos que nos permitirán entender que está pasando en el estado y las características de resistencia de organizaciones sociales y ciudadanos. Por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos y la intensificación de la explotación petrolera y de la minería.

Las protestas contra la hidroeléctrica en la Cuenca de La Antigua

Al finalizar el periodo de gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2005-2010), se dio a conocer el proyecto de construir 12 hidroeléctricas en el estado; el argumento: la necesidad de abastecer de agua a ciudades con alto crecimiento poblacional como Xalapa, Orizaba y Córdoba y la producción de energía. Una de las empresas a las que se encomendó esta tarea fue la empresa brasileña Odebrecht, misma que presentó un proyecto que incluía la construcción de una hidroeléctrica, el saneamiento de la ribera veracruzana y el impulso a la producción de energía.

Odebrecht es una empresa fundada en 1856, que inició con proyectos de construcción de carreteras y puentes al sur de Brasil. En 1923, Emilio Odebrecht y Cía. se convirtieron en una gran empresa, con actividad en el ámbito internacional. Hasta hoy, ha construido 38 aeropuertos, 46 puertos y alrededor de 11 500 kilómetros de carretera en el mundo. La Comisión Reguladora de Energía otorgó a la empresa Odebrecht el título de Permiso de Pequeña Producción de Energía Eléctrica, de acuerdo con la resolución RES/1041/2013 para el Desarrollo Energético la Antigua, con fecha del 10 de octubre de 2013 (Pérez, s/f).

Este proyecto se realizaría en el río Los Pescados, en la Cuenca de La Antigua, donde se sitúan los municipios de La Antigua, Puente Nacional y Jalcomulco, y donde existen otras poblaciones como Monte Blanco, Cosautlán, Limones, Barranca Grande y Tlaltetela, entre otras. La información indicaba que se llevaría agua del río Los Pescados a la ciudad de Xalapa (Rodríguez, 2015). Sin embargo, como ya se ha hecho costumbre en este tipo de proyectos, la empresa no informó con tiempo y transparencia sobre sus objetivos y sobre los posibles impactos que el proyecto tendría en el territorio y en la población.

En primer término, no era lógico llevar agua de una región que se localiza a 400 metros s. n. m. a otra que está a 1 400 metros s. n. m. como la ciudad de Xalapa, lo que llevó a pensar a los campesinos, empresarios y organizaciones que este objetivo solo era una parte del proyecto en que lo más importante, para la empresa, era la producción de energía.

Cuando la empresa inicia sus actividades en la región sin brindar información suficiente, ecologistas, principalmente pertenecientes a LAVIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental)⁴, empresarios tu-

⁴ La organización La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) se funda en 2010 agrupando a una serie de colectivos, con el fin de apoyar diversas luchas y protestas en Veracruz.

rísticos que se han asentado en la zona de Jalcomulco y ciudadanos(as) de las comunidades emprenden una serie de acciones con el objetivo de frenar los trabajos que la empresa había iniciado.

Estas redes se organizaron en el PUCARL (Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por los Ríos Libres), con la idea de parar los trabajos que la empresa había iniciado en el predio El Tamarindo sin los permisos que exige la ley, por lo que el 20 de enero de 2014 se toma la carretera Tuzamapan-Jalcomulco, y el 23 de enero de ese mismo año se toma la autopista Cardel-Veracruz. La observación de los campesinos de la zona era que se afectarían los cauces naturales del río, disminuyendo también su caudal, con lo que se afectaría también los cultivos de caña de azúcar y de mango manila.

Estas acciones dieron como resultado que el Gobierno del Estado aceptara la realización de una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados, a la que asistieron funcionarios de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México), de la Sedema (Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz) y del Gobierno del Estado, así como los miembros del PUCARL (Rodríguez, 2015).

En dicha mesa de diálogo se acordó realizar un recorrido por las zonas donde la empresa estaba trabajando, y a raíz de esto se comprobó que aquella no había respetado la normatividad y los procesos que había que llevar a cabo para proceder con los trabajos. Dados estos señalamientos, la empresa Odebrecht decidió parar los trabajos y retirarse de la región en 2014. Sin embargo, instancias como Profepa y Semarnat no proceden a levantar cargos contra la empresa. La Semarnat, en 2015, decide hacer otro Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y presionar a los activistas, encarcelando a tres ejidatarios de Jalcomulco, los cuales, al no encontrárseles responsabilidad, son liberados a los tres días.

Aunque la empresa se ha retirado del territorio, todo indica que está esperando a que existan mejores condiciones políticas para continuar con el proyecto. No obstante, en esta fase, se podría decir que la organización de los diversos actores de la región logró que la empresa no echara a andar el proyecto hidráulico. La clave para detener este proyecto ha sido la integración que tuvieron los activistas de las comunidades, los empresarios locales y el sector de ecologistas.

Mencionaremos dos casos más para completar un panorama sobre la política neoextractivista y sus impactos en el estado de Veracruz: el proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal y el proyecto sobre la minera Caballo Blanco. El proyecto El Naranjal es impulsado por la empresa Agroetanol de Veracruz,

apoyada por el gobierno estatal. El objetivo de dicho proyecto es instalar una hidroeléctrica que impactará los municipios de Amatlán de los Reyes, Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, El Naranjal, Yanga, Cuichapa y Coetzala. Para tal efecto, se desviarían los cauces del río, lo que disminuiría su caudal. Se tiene el propósito de utilizar el agua para abastecer a las ciudades de Córdoba y Orizaba.

La movilización en contra de este proyecto inició en el municipio de Amatlán; varias comunidades y organizaciones constituyeron al efecto el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, en 2011 (Hernández, 2016)⁵. Aproximadamente 30 comunidades de los municipios afectados solicitaron la cancelación del proyecto, al considerar que afectará sus actividades agrícolas y sus formas de vida. Los miembros del colectivo argumentan que ni la empresa ni el gobierno estatal han consultado a las comunidades y que no les han brindado información suficiente. Hasta 2014, el colectivo realizó diversas protestas y actividades informativas en contra del proyecto, con lo que hasta el momento se ha evitado su realización.

En cuanto al proyecto minero Caballo Blanco, en 2010 se informó que el gobierno estatal autorizaba la extracción de minerales a la minera Gold-group Mining Inc., empresa canadiense que llevaría la explotación a cielo abierto, para obtener oro, en un espacio que va del municipio de Alto Lucero al municipio de Actopan, ambos situados en el centro del estado. El área del proyecto abarca aproximadamente 55 000 hectáreas y se estima que tendría una producción de 100 000 onzas de oro al año, lo que representaría una ganancia de 100 millones de dólares, en un periodo de ocho años. Durante dicho periodo se estimó que habría una remoción de 30 000 toneladas de tierra y un uso intensivo del recurso hídrico de 2 500 a 3 000 metros cúbicos al día (Esteva, 2016).

El proceso de extracción minera se caracteriza por utilizar sustancias nocivas y contaminantes como el cianuro de sodio y el mercurio, para obtener el oro. Cuando el proyecto comenzaba a echarse a andar, se dio inicio a un intenso ciclo de protestas. En estas jugó un importante papel La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), misma que agrupó aproximadamente a 47 colectivos. La estrategia de LAVIDA fue constituir una red de solidaridad con los habitantes de las comunidades donde operaba el proyecto Caballo Blanco y posicionar las repercusiones de su actividad en las

⁵ El Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre se formó en 2011, sumándose 30 comunidades de la región que se opusieron al proyecto hidráulico El Naranjal; en este participaron campesinos, amas de casa, estudiantes, académicos y un sector de la Iglesia católica.

agendas nacional y estatal. La organización llevó a cabo foros y mesas informativas, recopilación de firmas contra el proyecto, festivales, movilizaciones y marchas. El conjunto de actividades fue muy intenso durante 2011 y 2012, lo que dio como resultado que el gobierno de Javier Duarte suspendiera el proyecto Caballo Blanco, por lo menos durante su gobierno.

Las protestas contra la industria petrolera

Sabemos que la industria petrolera tiene una larga historia, que va desde finales del siglo XIX, con los hallazgos de yacimientos petroleros y la explotación de estos por parte de las petroleras extranjeras, seguido de la nacionalización del petróleo y la expansión de esta industria, hasta llegar a la actualidad con la implementación de la reforma energética, que marca un parteaguas en la forma de administración de la industria del petróleo en nuestro país. La reforma energética abre el espectro de explotación de yacimientos nacionales y cambia la misión de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex): ya no será una industria para el desarrollo nacional sino una empresa competitiva que tendrá como objetivo la eficiencia.

Petróleos Mexicanos entró en una fase diferente; por un lado, los cambios en el mercado internacional, especialmente el decremento en el precio del petróleo, afectaron financieramente a la institución; por otro, campea una visión neoliberal, que asume que con los despidos masivos de trabajadores y la distribución de los yacimientos a empresas privadas será suficiente para la obtención de mayores recursos. La investigación petrolera deja de ser prioritaria y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) pasa a un segundo plano. Por otra parte, la relación con la dirigencia del sindicato petrolero ha sido perversa, pues ha propiciado y establecido prácticas antidemocráticas y corruptas a cambio de reformas que han llevado a abrir este sector a la iniciativa privada.

Uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención de la primera década del siglo XXI es que entramos a una etapa de mayor intensificación de la explotación petrolera, especialmente porque los yacimientos se están agotando en nuestro país. Esta intensificación está propiciando que se exploren todos los recursos al máximo y se utilicen nuevas técnicas para llegar a yacimientos que con las técnicas tradicionales no pueden explotarse, tales como el *fracking*, la extracción de *shale gas*, etc. Esto nos lleva a reflexionar acerca de los daños que históricamente la explotación petrolera ha ocasionado al medio ambiente y sus contradicciones: por un lado, la necesidad de que la

producción petrolera y petroquímica satisfaga las necesidades de consumo; y por otro, lo que ello genera en cuanto a daños al medio ambiente.

Esta contradicción nos ha llevado a estudiar la llamada región del Paleocanal, después llamada Aceite Terciario del Golfo (ATG), donde principalmente Pemex tiene como objetivo explotar los campos petroleros situados en 12 municipios ubicados en Puebla y en Veracruz; para ser precisos, tres municipios pertenecen al estado de Puebla y nueve al estado de Veracruz. Durante la década del 2000, Pemex había sido el responsable de la explotación y, a su vez, contrataba a empresas extranjeras como Schlumberger, Halliburton y Weatherford. Lo interesante de este aspecto es que, cuando se aprueba la reforma energética en 2014, empresas privadas del ramo ya tenían tiempo en el territorio mexicano.

La explotación de Aceite Terciario del Golfo

En 2002, el proyecto Aceite Terciario del Golfo inicia de manera consistente la explotación en varios de los municipios del Paleocanal; para 2014, se habían perforado 4 071 pozos petroleros, quedando en operación 2 100 de estos. En la operación de estos pozos Pemex mantenía el control operativo junto a la contratación de diversas empresas extranjeras, como las referidas más arriba. Pemex estableció este proyecto, que integraba en ese entonces 29 campos, subdivididos en ocho sectores que conforman el Paleocanal de Chicontepec (Jiménez y Sandoval, 2009). La superficie abarcaba 3 815 km², y comprendía los siguientes municipios: Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo, Tepetzintla, Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec.

Aceite Terciario del Golfo se administra y opera desde Pemex Poza Rica, con un grupo de profesionistas especializados en diversas áreas: geología, ingeniería petrolera e ingeniería civil, principalmente. Para los objetivos ATG en cuanto a la exploración y la explotación de los pozos petroleros, la región es complicada, particularmente para la extracción de crudo, ya que este se encuentra a gran profundidad, por lo cual se requiere la implementación de diferentes técnicas como la perforación tipo *zipper*, perforación horizontal a través de la hectárea fracturada⁶. Este tipo de perforación es la que se conoce como *fracking*, y tiene la característica de introducir los instrumentos de perforación de manera horizontal, para después fracturar las capas geológicas y extraer el petróleo.

⁶ Entrevistas con personal del Proyecto ATG en Poza Rica, Veracruz (2015).

Según los especialistas, la fractura es milimétrica, por medio de balines que producen grietas, por medio de lo cual se extrae el petróleo. Las grietas producidas son selladas y con ello se trata de evitar las filtraciones. Uno de los aspectos que llama la atención en la perspectiva de los ingenieros de Pemex es que, al extraer el petróleo, se trata de evitar las fugas, pues estas son severamente castigadas cuando son originadas por descuidos; pero al mismo tiempo se considera que estas fugas son parte de los riesgos de la explotación petrolera.

Sin embargo, es casi imposible asegurar que no haya filtraciones de petróleo, al no poder controlarse el impacto de la fractura; en ese caso, las fugas llegan a contaminar ríos y territorios en la región. También es importante tener claro que para llevar a cabo esta explotación se requieren grandes cantidades de agua, misma que se combina con otras sustancias para poder generar la fractura. No en todos los campos perforados se utiliza esta técnica, pero cada día es mayor su uso, sobre todo cuando se localizan yacimientos que están un poco dispersos y es necesario extraer petróleo en grandes cantidades.

En cuanto al personal especializado, es necesario mencionar que, durante el trabajo de campo realizado en 2015, escuchamos un discurso recurrente: “Nosotros los mexicanos somos eficientes para la gestión técnica del petróleo, ya que aprendimos de los trabajadores extranjeros”⁷. Esto es paradigmático, porque parece un discurso de 1938, año en que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Dado que se descuidó la investigación, al tratar de explotar los pozos maduros o de extraer petróleo a profundidad, se requirió de nueva tecnología y de nuevas técnicas, que tuvieron que aprenderse de las empresas transnacionales.

Con la llegada de las empresas extranjeras, la mayoría del personal era estadounidense, holandés, venezolano, etc. Con el tiempo, estas empresas fueron contratando y capacitando a personal mexicano. Hoy se ve muy poco personal extranjero. De 2008 a 2012, la intensificación de la explotación petrolera con las nuevas técnicas fue una característica de la región; después de ese año, al valorarse los costos de producción, Pemex consideró que eran muy altos, porque la perforación horizontal implica mucha infraestructura: maquinaria especializada, distribuidores de aceite, camiones, etc., por lo cual disminuyó significativamente la producción hasta que se aprobara la reforma energética y se redefinieran los campos de extracción para Pemex y para las empresas extranjeras. ATG quería continuar trabajando en los campos de Venustiano Carranza, Tihuatlán y Papantla.

⁷ Entrevistas con ingenieros del Proyecto ATG en Poza Rica, Veracruz (2015).

La idea de sustentabilidad

Los integrantes del proyecto ATG tienen una concepción definida sobre lo que consideran sustentabilidad. En el trabajo de campo que realicé (2015), en cada campo o área de trabajo se explicitaba el protocolo de seguridad y de cuidado del medio ambiente. La idea principal es el aprovechamiento del recurso para que no se desperdicie energía, en lo que llaman peras autosustentables, que consisten en aprovechar el gas para generar energía.

En cuanto a los riesgos de explosiones o de fugas, según sus reportes se les da seguimiento a las diferentes áreas: baterías, pozos, compresoras, peras, etc., a través de un centro de monitoreo operado por personal de informática, que está atento a los registros de cada centro, y que trata de prevenir los accidentes en cada área. Sin embargo, también se considera que, ante la imprevisibilidad de los accidentes y, sobre todo, de las fugas (que traen contaminación), no hay más remedio que la reparación del daño.

Los tipos de accidentes que se han registrado en la región son por explosión de ductos, contaminación del agua y de terrenos de los campesinos y de los ejidatarios, lo cual normalmente es atendido por medio de un área llamada de Enlace y Sustentabilidad, que negocia indemnizaciones a los afectados. Llama la atención que, en ese rubro, Pemex ha utilizado varias estrategias, desde el pago directo a los afectados hasta otorgar recursos a los ayuntamientos para evitar el trato directo con los aquejados, o la construcción de escuelas, clínicas y otro tipo de infraestructura que soliciten las comunidades conflictuadas. Algunas de esas estrategias ya son prácticas históricas.

Sin embargo, en este renglón es patente el cambio de esta empresa en lo que se refiere a sus responsabilidades sociales. De constituir una empresa que se ostentaba como fundamental para el desarrollo regional, ahora asume que no tiene responsabilidad alguna en cuanto a los problemas estructurales del país, como el de la pobreza. Con esto podemos decir que la idea de sustentabilidad es corta y que se impone más bien una visión muy tecnocrática de lo que se puede considerar sustentable.

Impactos y resistencia a la explotación petrolera

Los daños a los mantos acuíferos en Venustiano Carranza, Puebla, han sido señalados en distintos medios de comunicación. Tal es el caso de los referidos por Eduardo Gómez Caña, integrante de la Unión Nacional de

Profesionales Técnicos del Petróleo, quien enunció que con la aprobación de la reforma energética se abrió totalmente la puerta al agotamiento y la desaparición de los mantos, y afirmó que la fractura hidráulica “es uno de los engaños más grandes, pues el producto final es demasiado caro. El contexto geográfico donde se encuentra el hidrocarburo, ese subsuelo, hace que se encuentre en cápsulas pequeñas, por lo que resulta demasiado caro extraerlo” (Ánimas, 2013).

En 2008, los pobladores de Venustiano Carranza resultaron afectados por la presencia de las empresas contratadas por Pemex, por lo que realizaron una movilización de tres días –del 11 al 13 de marzo–. Ellos solicitaron involucrarse en la toma de decisiones, a fin de evitar el perjuicio a sus comunidades, en igualdad de circunstancias que los representantes de Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (ATG) y los tres niveles de gobierno.

Venustiano Carranza se localiza en la parte norte del estado de Puebla; colinda con el estado de Veracruz y tiene una superficie de 308.71 km²; su clima es cálido húmedo. La demografía es de aproximadamente 30 000 habitantes, de los cuales 5 300 están en la cabecera municipal.

Las demandas de los habitantes en relación con los daños causados por Pemex y por las empresas contratadas (como Schlumberger, Halliburton, Weartheford, Fluor Daniels, Excellence, Bourton, Lipsa, Zapata Internacional) fueron: transparencia en cuanto a conocer el monto de los recursos que la paraestatal otorga al municipio a cuenta del permiso para que los vehículos pasen por la población, y de aquellos recursos que la comisión de desarrollo sustentable de la paraestatal otorga a la localidad. Esto dado que suponían que tales recursos no habían sido proporcionados a la administración municipal de este lugar o que los funcionarios municipales estaban haciendo un mal uso de los mismos, puesto que no había evidencia de acciones para resarcir los daños ocasionados por Pemex y las otras empresas.

Entre los perjuicios se cuenta la falta de agua, debido a que, al dinamitar, se modificaron los cauces de los mantos acuíferos. La ausencia del vital líquido llegó a ser hasta de 90% en las viviendas. La mayoría de las vialidades y de los drenajes fueron afectados por el paso continuo de camiones pesados, debido a la falta de un libramiento, lo que también produjo daños en algunas viviendas, como la ruptura de cristales y la aparición de grietas en las paredes (Ánimas, 2009).

En más sobre el tema de daños y perjuicios, en la congregación Postectitla, el suplente del agente municipal señaló, en diciembre de 2003, que Pemex hizo los trazados por donde iban a pasar las líneas; luego comenzó a perforar,

afectando los caminos; pero estos nunca fueron reparados (López, 2003). En el caso de los terrenos que se perforaron, las indemnizaciones fueron muy pequeñas: tres mil, cuatro mil y cinco mil pesos, lo que consideró insuficiente para resarcir el daño (López, 2003).

En Postectitla, las tierras siguen siendo comunales y abarcan 4 507 hectáreas. Hay cerca de 1 000 comuneros, que siembran maíz y tienen pasto. En las comunidades de Tenextitla y su anexo Tlaquextla, la empresa abrió brechas, hizo perforaciones, levantamientos y “tiró” cableado. La paraestatal gratificó a los campesinos por algunos de los daños, pero no por todos. En esas circunstancias estuvieron también las comunidades Mesa de Calcote, Tzapotzala, Mesa de Aguayo, El Cuartel y Mesa de Tzonámatl (López, 2003).

En términos generales, los habitantes de Venustiano Carranza buscaban que sus opiniones fueran consideradas en la conformación de las políticas públicas, porque ellos eran, por supuesto, los que estaban experimentando el impacto del proyecto del Paleocanal y sentían que tenían elementos y argumentos para señalar de qué manera dicho impacto ambiental y social generado por la exploración y la explotación del crudo podría ser menor; también reclamaban que la derrama económica redundara en beneficio de los pobladores, básicamente a través de contratos laborales.

El punto central es que en esa región, sí se echó andar la explotación a través de la hectárea fracturada, lo que ocasionó, como hemos mencionado, la contaminación del agua, la desviación de cauces de los riachuelos (a fin de realizarse la fractura) y la afectación de los caminos de las comunidades. Como respuesta, Pemex construyó en la cabecera municipal una clínica y pavimentó calles. Pero no tiene una respuesta integral a los problemas que ocasiona.

La comunidad de Emiliano Zapata

El proceso en esta comunidad ha sido diferente respecto del de Venustiano Carranza. Emiliano Zapata es un ejido de 600 hectáreas, que se constituye en 1936 y pertenece al municipio de Papantla. Hay 59 ejidatarios y tiene una población de aproximadamente 2 000 habitantes. Allí se produce, como en toda la región, plátano, cítricos y vainilla. También se cría ganado.

Su relación con Pemex y con el petróleo no es nueva, pues esta empresa inicia la exploración y la explotación en la zona en 1956; hasta la fecha se han perforado 60 pozos y quedan 20 pozos en operación (Juárez, 2015). A un sec-

tor de la población le extraña que, a partir de 2012, las actividades petroleras disminuyeran, lo que llevó a que algunos habitantes del lugar dejaran de tener trabajo ya sea en Pemex o en alguna de las empresas petroleras privadas⁸.

Asimismo, actividades secundarias como el comercio o pequeños restaurantes y fondas cerraron por la falta de movimiento. Es una comunidad donde impacta el abandono de la actividad petrolera. Al parecer, la falta de empleo produce un malestar contra Pemex y la industria petrolera en el sentido de que los problemas que antes eran secundarios ahora son graves; esto es, la existencia de empleo podía ocultar los otros problemas, como la contaminación o la instalación de ductos en las parcelas de los ejidatarios o de los propietarios (causando la depreciación de esas tierras).

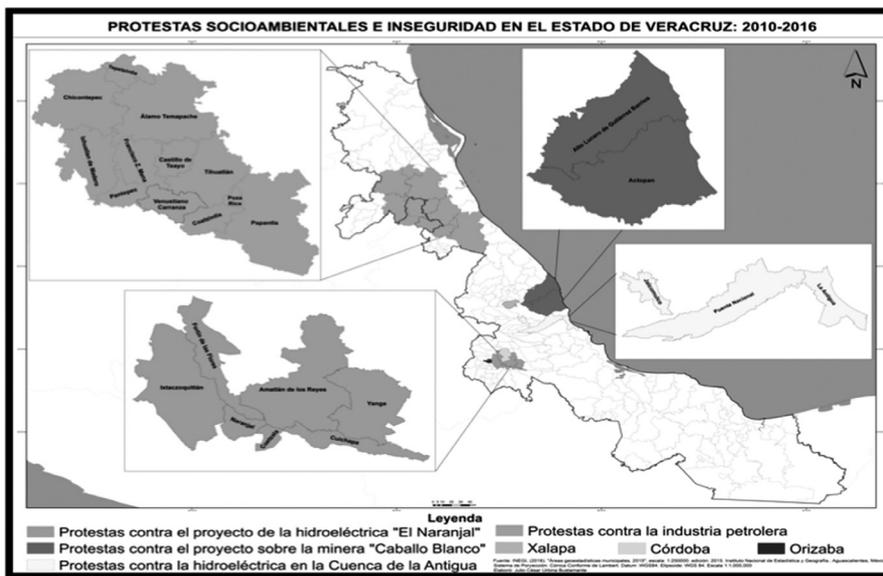
Por otro lado, hay otro sector de la población, especialmente el dedicado a las actividades agrícolas, que considera que el petróleo solo ha generado contaminación. Por ejemplo, se menciona la contaminación de las parcelas y, en la actualidad, la contaminación por ruido; esto último ocasionó que en 2014 parte de la comunidad se inconformara y tomara la carretera federal, solicitando se retirara el mechón de gas que producía el ruido. La solución ofrecida a esta demanda fue que se regularía la emisión de gas y con ello el ruido disminuiría.

Por otra parte, ante la utilización del *fracking* en la actividad petrolera, en otras partes de la zona, como el ejemplo de Venustiano Carranza, los ejidatarios piensan que en poco tiempo se regresará a la explotación de los pozos maduros. Por ello es de llamar la atención la campaña que se ha desarrollado en contra del *fracking* en la comunidad. Un organismo de derechos humanos ha capacitado a algunos sectores de la comunidad, para entender en qué consiste este proceso y la necesidad de que una comunidad que ha tenido una relación histórica con el petróleo no se vea de nuevo sorprendida.

Esa es la tensión permanente con Pemex y con las empresas privadas. Por ejemplo, Pemex instaló una clínica, donó una ambulancia y apoyó con infraestructura necesaria para la comunidad. Lo mismo pasa con la explotación de tierras en la zona ejidal: dado que la producción ha disminuido y la comercialización de productos agrícolas no se lleva a cabo a los mejores precios, la explotación petrolera puede generar indemnizaciones que apoyen momentáneamente a los campesinos. Por ello es interesante observar cómo la comunidad empieza a reflexionar sobre los costos y beneficios de la explotación petrolera.

⁸ Entrevista con el delegado municipal de Emiliano Zapata, abril de 2016.

Mapa 1. Protestas socioambientales e inseguridad en el estado de Veracruz: 2010-2016



Fuente: INEGI, 2015, elaboración de Julio César Urbina Bustamante.

La red ciudadana contra la inseguridad

Los problemas de inseguridad que aquejan al estado de Veracruz no han sido abordados con seriedad por parte del gobierno, puesto que las medidas implementadas, como los retenes o la integración y puesta en marcha de la policía civil, no tienen los resultados que la ciudadanía reclama, más bien dan la impresión de ser acciones que tienen como objetivo hacer creer que se trabaja en el tema, pero en realidad no tienen la fuerza ni el convencimiento que generen avances significativos en la resolución de ese fenómeno, pues no han frenado la presencia de los grupos delincuenciales ni sus acciones, lo que se refleja en el aumento de secuestros, extorsiones y desapariciones⁹.

⁹ Se ha documentado por espacio de cinco años la presencia de los Zetas y del grupo Nueva Generación protagonizando varios enfrentamientos y asesinatos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, en 2013 el secuestro y las extorsiones se intensificaron: ocurrieron 109 secuestros y 46 extorsiones; para 2014, los secuestros fueron 144 y 255 los actos de extorsión. Actualmente, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en secuestros, superado solo por el Estado de México y por Tamaulipas, según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia ocasionada por el narcotráfico se incrementó a partir de 2002, pero fue hasta 2007 cuando se convirtió en elemento sobredeterminado de la dinámica de la inseguridad en Veracruz (Zavaleta Betancourt, 2012a).

Otro fenómeno alarmante en cuanto a la inseguridad y la violencia es la cuestión de los feminicidios. Según información de la Procuraduría General del Estado, se han registrado, de 2013 a 2014, 175 asesinatos de mujeres¹⁰. Cabe mencionar que actualmente se está llevando a cabo el protocolo para establecer una alerta de género; sin embargo, existe poca confianza en los resultados, dada la manipulación de la información que pueda realizar el Ejecutivo, lo que aumenta la posibilidad de que todo termine en meras recomendaciones.

En ese tenor, la inseguridad ha impactado también a periodistas; estos se han visto afectados y han sido severamente agredidos en el ejercicio de su profesión, convirtiéndose así Veracruz en un territorio donde el ejercicio periodístico es de alto riesgo. Veracruz fue uno de los estados visitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual constató que en el país hay una grave crisis de derechos humanos. Se han añadido a esto las desafortunadas intervenciones públicas del gobernador en turno, Javier Duarte, desacreditando a periodistas y poniendo al descubierto su política, centrada en el control sobre la mayoría de los medios de comunicación.

Dado lo anterior, existe desconcierto en la ciudadanía debido a los eventos generados por el crimen organizado, principalmente a partir de la evidente incapacidad del Estado para afrontar esos problemas, que se hicieron mucho más visibles a partir de 2008, a raíz de los asesinatos de dos familiares de un prominente empresario xalapeño y de una prestigiada académica, crimen al que el gobierno estatal no dio una respuesta clara, por lo que el caso quedó sin resolución durante el periodo del gobernador priista Fidel Herrera Beltrán.

Los sectores universitarios, familiares de víctimas y profesores también se han movilizado ante eventos que los han afectado, como el que ocurrió en mayo de 2011 en el puerto de Veracruz, con el asesinato de un profesor

¹⁰ *imagendelgolfo.com*, consulta del 4 de mayo de 2015.

de la Facultad de Pedagogía, cuya investigación ha quedado rezagada. No obstante, el gobierno estatal, con la finalidad de minimizar un hecho que, ante la opinión pública, situaba al estado a merced del narcotráfico, propagó que los hábitos sexuales del profesor fueron la principal causa de su muerte, al involucrarse con un narcotraficante. El trato dado a este caso fue modelo para justificar las siguientes muertes y secuestros, estigmatizando y personalizando los asesinatos y los secuestros.

Otra organización que ha logrado hacer visible el problema de las desapariciones forzadas en la ciudad de Xalapa es el Colectivo por la Paz, mismo que ha llamado a la ciudadanía a manifestarse contra la inseguridad, y que ha solicitado a las autoridades pronta respuesta a las investigaciones sobre personas desaparecidas. Así, los ciudadanos están tratando de pasar el umbral del miedo y dar comienzo a una fase abierta de exigencia a las autoridades. Otra organización, la Coordinadora por la Paz, presionó a las autoridades para que establecieran mesas de trabajo con el objetivo de dar seguimiento a las desapariciones. Dichas mesas funcionaron durante un periodo aproximado de seis meses; pero, al observar que no había avances, la Coordinadora por la Paz las dio por terminadas¹¹.

Además, en el estado de Veracruz se han llevado a cabo diversas manifestaciones por parte de sectores de la ciudadanía que se han visto afectados por la inseguridad. Las protestas han sido apoyadas también por organizaciones no gubernamentales y redes, como el Movimiento Indígena Zapatista, que tiene una presencia significativa en regiones como Papantla, Los Tuxtlas y Pajapan, y que se ha caracterizado por acompañar al sector indígena y promover la formación cívica y de género; también la Red Cívica Veracruzana, que agrupa a varias asociaciones no gubernamentales, ha participado en el proceso de democratización en el estado, entre otras.

En los últimos años se han formado otros colectivos, como el colectivo Solecito, que ha emprendido intensas campañas denunciando a los desaparecidos en el estado y ha realizado, con sus propios recursos, búsquedas de desaparecidos, localizando fosas, como el caso en la zona de Santa Fe, a escasa distancia de la ciudad de Veracruz. En 2017, las desapariciones y los asesinatos han persistido en el territorio veracruzano. Por ejemplo, en Martínez de la Torre, sectores de la ciudadanía protestaron por el asesinato de una enfermera; lo mismo sucedió en la ciudad de Córdoba, donde periodistas denunciaron la

¹¹ Entrevista con activista defensora de derechos humanos y exintegrante de la Coordinadora por la Paz, Xalapa, Veracruz, 2016.

muerte del periodista Ricardo Munlui. En la ciudad de Minatitlán, se llevaron a cabo protestas por el asesinato de varias mujeres¹².

Comentario final

La protesta social en Veracruz durante el periodo 2010-2015 se ha presentado en diversos ámbitos: las comunidades que se resisten a la instalación de megaproyectos, como los que hemos tratado; las protestas indígenas, las estudiantiles, las de los trabajadores de la industria y las protestas contra la inseguridad.

Nosotros seleccionamos dos campos: el de la protesta socioambiental y el de las protestas contra la inseguridad. Estas acontecen en un contexto donde el sistema político autoritario juega un papel preponderante. Aunque podemos reconocer que, con la incipiente alternancia, producto de la elección del 5 de junio de este año, puede abrirse un proceso de transición que genere una estructura de oportunidades políticas favorables para los actores sociales y sus protestas, la historia que tiene el autoritarismo político en el estado nos lleva a pensar que este proceso puede ser de largo plazo.

Los casos que presentamos nos indican que, con la nueva fase capitalista, representada por el neoextractivismo, se trata de imponer una serie de proyectos nuevos, y otros ya en marcha, que tienen como objetivo beneficiar a empresarios nacionales y extranjeros, y también a políticos que usan los instrumentos del Estado para justificar estos proyectos, tales como los hidroeléctricos, los mineros o la explotación petrolera.

En este sentido, en cuanto a los casos presentados, podemos concluir que la respuesta de los ciudadanos es la resistencia a estos proyectos, inicialmente de manera espontánea, y enseguida por medio de la formación de organizaciones. En los casos de resistencia ante el intento por construir las hidroeléctricas en Amatlán y en La Antigua, la formación de las organizaciones consta de actores diversos, ciudadanos de comunidades, sectores de la Iglesia católica, empresarios turísticos y académicos vinculados a la defensa del medio ambiente. El repertorio de tipos de protesta es variado, desde toma de carreteras, bloqueos a espacios de trabajo, lucha legal y difusión en medios, todo haciendo hincapié en la defensa del territorio.

En el caso del petróleo, las protestas son distintas, diríamos que más espontáneas, y no se han logrado articular las distintas luchas en la región, como

¹² *Plumas Libres*, consultas del 6 de marzo y del 20 de marzo de 2017.

en el periodo de los noventa, cuando distintas agrupaciones de productores se organizaron para negociar sobre todo indemnizaciones por afectaciones¹³. En esta etapa, la explotación petrolera que privilegia la técnica del *fracking* es solo una muestra de la necesidad, por parte de las empresas, de intensificar la explotación petrolera sin importar los impactos negativos ambientales, tal como se plantea en el esquema de modelo extractivista exportador ya comentado (Svampa, 2008).

Manifestarse en un entorno totalmente adverso, al grado de que al propio exgobernador Javier Duarte y a responsables de la seguridad del estado se les responsabilizó de haberse aliado con la delincuencia organizada, indicaba un hartazgo e indignación que colmaron a diversos sectores de la ciudadanía.

Estas protestas, en los ámbitos de lo socioambiental y de la inseguridad, mostraron el grado de descomposición social y política en que se encuentra el estado y el sistema político.

Desde esta perspectiva, pensamos que el lento cambio que se manifestó en las elecciones de junio de 2016 fue resultado de estas condiciones de deterioro. Por el momento, no podemos mostrar porcentajes electorales por sector, pero sí vincular los resultados electorales con la inconformidad y la indignación acumulada en amplios sectores de la sociedad veracruzana, que demandó un cambio a través de su voto. Analizar con detalle este aspecto nos permitirá precisar esta relación entre protestas y luchas sociales y la transformación del sistema político (Tilly, 2010).

Bibliografía

- AGUILAR, M. (2008). “Elecciones y medios de comunicación en Veracruz, 2004-2007” en *La Palabra y el Hombre*. Número 5, México, Universidad Veracruzana.
- AGUILAR, M. y E. Ortiz (coords.) (2011). *Historia general de Veracruz*. México, Universidad Veracruzana / Secretaría de Educación del Estado de Veracruz.
- AGUILAR, M. (2012). “La difícil construcción democrática en Veracruz” en *Acceso a la justicia y actores sociales*. México, Universidad Veracruzana.
- BUSCAGLIA, E. (2013). *Vacíos de poder en México*. México, Debate.

¹³ Entrevista con Minervo Arteaga Saucedo, en Papantla, noviembre de 2017.

- CARRASCO, A. y R. Martínez (2011). “Ajuste de cuentas estilo Zeta” en *Proceso*. Número 38, México.
- CARRASCO, A. (2012). “Crimen y ¿castigo?” en *Proceso*. Número 1853, México.
- ESTEVA, Katya (2016). *La vida o la mina: participación de dos comunidades en el proceso de lucha contra el proyecto minero Caballo Blanco*. Tesis de maestría. México, Universidad Veracruzana-Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.
- HERNÁNDEZ, Manuel (2016). “Las luchas en contra de la acumulación por desposesión en el centro de Veracruz. El caso del movimiento en contra del proyecto hidroeléctrico El Naranjal” en Aguilar, Martín (coord.), *Resistencia y protesta social en el sureste de México*. México, UAM / RED.
- ILLADES, C. y T. Santiago (2014). *Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra*. México, Era.
- JIMÉNEZ Meneses, Gabriela y Augusto Daniel Sandoval Chávez (2009). *Estrategias de explotación de campos petroleros con características similares a Chicontepec*. Tesis para obtener el título de Ingeniero Petrolero. México, Facultad de Ingeniería-UNAM, División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra.
- JUÁREZ San Juan, Osvaldo Jair (2015). “Diagnostico regional sobre el ejido Emiliano Zapata” en *Reporte de investigación*. Espinal, Veracruz, Universidad Veracruzana Intercultural.
- MELUCCI, Alberto (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, El Colegio de México.
- PÉREZ, Luz María (s/f). *Capitalismo por despojo y derechos humanos: el caso de los pueblos unidos en defensa de la cuenca del río La Antigua (PUCARL), 2010-2015*. Tesis (en proceso) para obtener el título de Maestra en Ciencias Sociales. Xalapa, Universidad Veracruzana-Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.
- PETRÓLEOS Mexicanos (Pemex) (2012). *Memoria de labores 2012*. México, Pemex.
- RODRÍGUEZ, Hipólito (2015). “Conflictos sociales asociados a la defensa del ambiente: agua y paisajes de la región Veracruz centro” en *Estudios y Pesquisas sobre las Américas*. 9 (3), Brasilia.
- RODRÍGUEZ, H. y G. Cházaro (2012). “Desigualdad e inseguridad en Veracruz” en *Diagnóstico de la violencia, la inseguridad y la justicia en Veracruz*. México, UV / Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
- RODRÍGUEZ, R. (2009). *El México narco*. México, Temas de hoy.

- SAN MARTÍN, J. y R. Gutiérrez (2010). *Reflexiones sobre la violencia*. México, Siglo Veintiuno.
- SVAMPA, Maristella (2008). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Argentina, Siglo Veintiuno.
- TILLY, Charles (2010). *Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona, Crítica.
- ZAVALETA Betancourt, A. (2012a). “La inseguridad y la seguridad de los veracruzanos” en *Diagnóstico de la violencia, la inseguridad y la justicia en Veracruz*. México, UV / SEP.
- ZAVALETA Betancourt, A. (2012b). *La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina*. Argentina, CLACSO.
- ZIBECHI, R. (2010). *América Latina: contrainsurgencia y pobreza*. Colombia, Desde abajo.

Hemerografía

- ANIMAL Político (2014). “Fosa común localizada en el rancho El Diamante en el municipio de Tres Valles” disponible en: <http://www.animalpolitico.com/2014/07/tras-aumento-en-homicidios-y-secuestros-en-veracruz-duarte-dice-me-toco-bailar-con-la-mas-fea/> [Accesado el 8 de julio de 2014]
- ÁNIMAS Vargas, Leticia (2009). “Solicitan políticas ambientales para resarcir el impacto” en *diario Política* [Accesado el lunes 20 de abril de 2019]
- ÁNIMAS Vargas, Leticia (2013). “Reforma Energética favorecerá el fracking, prevé especialista” disponible en: <http://municipiospuebla.com.mx/nota/2013-12-17/huachuquingo/reforma-energ%C3%A9tica-favorecer%C3%A1-el-fracking-prev%C3%A9-especialista>
- ÁVILA, Édgar (2016). “Entregaron al crimen a jóvenes de Papantla” en *El Universal*. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/1/entregaron-al-crimen-jovenes-de-papantla> [Accesado el 1 de abril de 2016]
- BLOG.EXPEDIENTE.MX. (2014). “Veracruz, líder en plagio de migrantes” disponible en: <http://blog.expediente.mx/nota.php?nId=7456#.VCBYRJR-5Mx> [Accesado el 14 de julio de 2014]
- CAMACHO, Fernando (2013). “AI: con el actual gobierno la situación vulnerable de los migrantes no cambió” en *La Jornada*, disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2013/03/13/politica/016n2pol> [Accesado el 13 de marzo de 2013]

- DE LUNA, Francisco (2017). “Marcha en Martínez de la Torre para exigir la aparición con vida de una enfermera” en *Plumas Libres*, disponible en: <http://plumaslibres.com.mx/2017/02/06/marchan-martinez-la-torre-exigir-la-aparicion-vida-una-enfermera/> [Accesado el 6 de febrero de 2017]
- EL UNIVERSAL (2012). “Red Política” en *El Universal*. Julio 2012.
- IMAGEN del Golfo (2015). *Imagendelgolfo* [Accesado el 4 de mayo de 2015]
- JÁCOME, Daniela (2017). “Marcharon periodistas de Córdoba para exigir justicia por asesinato del periodista Ricardo Monlui” en *Plumas Libres*, disponible en: <http://plumaslibres.com.mx/2017/03/20/marcharon-periodistas-cordoba-exigir-justicia-asesinato-del-periodista-ricardo-monlui/> [Accesado el 20 de marzo de 2017]
- LÓPEZ, Guadalupe (2003). “Confusión por el Paleocanal de Chicontepec” en *diario Política* [Accesado el lunes 29 de diciembre de 2003]
- PERIODISTAS DIGITALES (2014). “Ocupa Veracruz segundo lugar nacional en delitos por secuestro” en *Plumas Libres*, disponible en: <http://plumaslibres.com.mx/2014/09/19/ocupa-veracruz-segundo-lugar-nacional-en-delitos-por-secuestro/> [Accesado el 19 de septiembre de 2014]
- PERIODISTAS DIGITALES (2017). “Marchan y protestan en Minatitlán por secuestros y asesinatos de mujeres, exigen seguridad” en *Plumas Libres*, disponible en: <http://plumaslibres.com.mx/2017/03/06/marchan-protestan-minatitlan-secuestros-asesinatos-mujeres-exigen-seguridad/> [Accesado el 6 de marzo de 2017]
- REYES, Jorge (2017). “México es un fosario: ante desapariciones, cientos marchan junto a Solalinde en Orizaba” en *Al Calor Político*, disponible en: <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-mexico-es-un-fosario-ante-desapariciones-cientos-marchan-junto-a-solalinde-en-orizaba-232688.html#.WZScRraQzcd> [Accesado el 28 de abril de 2017]
- ROBLES, Andrés (2017). “Despiden al activista Gordon Strom con marcha de paz por las principales calles de Teocelo” en *Al Calor Político*, disponible en: <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/despiden-al-activista-gordon-strom-con-marcha-de-paz-por-las-principales-calles-de-teocelo-233238.html#.WRCZ0dLhBH0> [Accesado el 7 de mayo de 2017]

Entrevistas

Entrevista a ingenieros del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), realizada por Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Poza Rica, Veracruz, 2015.

Entrevista a Delegado Municipal de Emiliano Zapata, realizada por Martín Gerardo Aguilar Sánchez, abril de 2016.

Entrevista a activista defensora de los derechos humanos y exintegrante de la Coordinadora de la Paz, realizada por Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Xalapa, Veracruz, 2016.

Entrevista a Minervo Arteaga Sucedo, realizada por Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Papantla, Veracruz, noviembre de 2017.